https://doi.org/10.56048/MQR20225.9.3.2025.e850

Social Policies for the Inclusion of People with Disabilities: Challenges in the Rural Parish Once de Noviembre

Políticas Sociales en la Inclusión de Personas con Discapacidad: Desafíos en la Parroquia Once de Noviembre

Autores:

Herrera-Yugcha, Camila Doménica UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI Estudiante del área del Trabajo Social Latacunga – Ecuador



camila.herrera4104@utc.edu.ec



https://orcid.org/0009-0000-2801-2212

Hurtado-Guasti, Lizbeth Estefania UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI

Estudiante del área del Trabajo Social

Latacunga – Ecuador



lizbeth.hurtado9195@utc.edu.ec



https://orcid.org/0009-0003-2056-2502

Quilumba-Tumbaco, María Piedad UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI Msc. Trabajadora Social Docente Tutor del área de Trabajo Social Latacunga – Ecuador



maria.quilumba0944@utc.edu.ec



https://orcid.org/0009-0002-2927-434X

Fechas de recepción: 22-JUN-2025 aceptación: 22-JUL-2025 publicación: 30-SEP-2025





Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo analizar los desafíos de las políticas sociales para la inclusión de personas con discapacidad en la parroquia Once de Noviembre, cantón Latacunga. Se partió del reconocimiento de que las políticas públicas vigentes no han logrado garantizar el ejercicio pleno de derechos de este grupo poblacional, especialmente en contextos rurales donde la institucionalidad es débil y las barreras de acceso son múltiples. La metodología empleada fue cualitativa, con un enfoque inductivo, sustentado en entrevistas semiestructuradas y observación participante, lo que permitió recoger información profunda desde las vivencias de los actores. Los resultados revelaron cuatro categorías centrales: "acceso a programas y servicios sociales estatales", "discriminación y exclusión", "nivel de participación comunitaria", y "red de apoyo social". Se identificó que la exclusión opera de manera interseccional, combinando factores como tipo de discapacidad, género, edad y nivel educativo. Las mujeres y adultos mayores enfrentaron mayores niveles de vulnerabilidad, mientras que, los jóvenes mostraron disposición a la participación social. Asimismo, se evidenció una brecha entre el discurso institucional y las realidades concretas vividas por las personas con discapacidad. Como aportes principales, se propone un modelo de análisis cualitativo replicable en contextos rurales similares, que visibiliza las múltiples dimensiones de la exclusión y genera insumos para el rediseño de políticas sociales con enfoque territorial e intersectorial. Se concluye que la inclusión real no puede lograrse sin la participación activa de los actores sociales y sin una mirada contextualizada que considere las particularidades culturales, económicas y geográficas del territorio.

Palabras clave: Inclusión Social; Discapacidad; Políticas Públicas; Servicios Sociales

Abstract

This research aimed to analyze the challenges of social policies for the inclusion of people with disabilities in the parish of Once de Noviembre, Latacunga canton. It was based on the recognition that current public policies have not managed to guarantee the full exercise of rights for this population group, especially in rural contexts where institutional presence is weak and access barriers are multiple. The methodology used was qualitative, with an inductive approach, supported by semi-structured interviews and participant observation, which allowed for the collection of in-depth information from the participants' lived experiences. The results revealed four central categories: access to state social programs and services, discrimination and exclusion, level of community participation, and social support network. It was found that exclusion operates intersectionally, combining factors such as type of disability, gender, age, and educational level. Women and older adults faced higher levels of vulnerability, while young people showed greater willingness to engage in social participation. Likewise, a gap was evidenced between institutional discourse and the concrete realities experienced by people with disabilities. As main contributions, a replicable qualitative analysis model is proposed for similar rural contexts, which highlights the multiple dimensions of exclusion and provides inputs for the redesign of social policies with a territorial and intersectoral approach. It is concluded that real inclusion cannot be achieved without the active participation of social actors and without a contextualized view that considers the cultural, economic, and geographic specificities of the territory.

Keywords: Social Inclusion; Disability; Public Policies; Social Services

Introducción

En las recientes décadas, América Latina ha demostrado progresos notables en la inclusión del enfoque de derechos en sus políticas sociales orientadas a las personas con algún tipo de discapacidad. La mayoría de los países de la región han ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), lo que ha conllevado una transición conceptual, desde perspectivas asistencialistas y biomédicas hacia esquemas sociales e inclusivos. Sin embargo, la implementación efectiva de estas políticas enfrenta múltiples desafíos, particularmente en territorios rurales y comunidades históricamente excluidas, donde la intersección entre discapacidad, pobreza, etnicidad y aislamiento geográfico profundiza las brechas sociales (Duryea et al., 2023; Rolon y Garcia, 2022). En concordancia con lo planteado por Duryea et al. (2023), los programas de asistencia en América Latina tienden a estar concentrados en los núcleos urbanos, dejando vacíos operativos en las zonas rurales.

En Ecuador, y específicamente en la parroquia Once de Noviembre, ubicada en el cantón Latacunga de la provincia de Cotopaxi, estas tensiones son especialmente evidentes. Según datos del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS, 2024), en el cantón se registran 4.981 personas con discapacidad, siendo los tipos predominantes la física (36,96 %), intelectual (21,84 %) y auditiva (20,16 %). Además, el 29,35 % corresponde a adultos mayores, lo que refleja una problemática interseccional entre envejecimiento, discapacidad y ruralidad. La falta de accesibilidad física, la exclusión del mercado laboral y la escasa presencia de servicios diferenciados en salud y educación son realidades persistentes (Pinilla-Roncancio y Gallardo, 2022).

Las políticas sociales implementadas por el Estado ecuatoriano, como el Bono Joaquín Gallegos Lara han implementado mecanismos de asistencia económica dirigidos a las personas con discapacidad a objetivo de mitigar su vulnerabilidad socioeconómica y promover su inclusión social. No obstante, estudios recientes evidencian que estas iniciativas, aunque necesarias, se inscriben en una lógica asistencialista y no transformadora. Estas políticas suelen operar de manera desarticulada y con escasa contextualización territorial y cultural, lo que limita su efectividad en comunidades indígenas y campesinas como las de Cotopaxi (Bandeira et al., 2020; Pesántez, 2024). Las comunidades rurales enfrentan barreras que van más allá de lo económico: estigmatización, invisibilidad estadística, ausencia de participación y debilidad institucional.

A nivel regional, se ha identificado que los marcos normativos progresistas no siempre se traducen en cambios reales para las personas con discapacidad, especialmente en zonas rurales. Investigaciones realizadas en diversos países de América Latina muestran que existen contradicciones entre el diseño legal y la práctica, lo que se manifiesta en una escasa cobertura de servicios, falta de datos desagregados, y poca adecuación de los programas a las realidades locales (Duryea et al., 2023; Suyo-Vega et al., 2022). Esta desconexión se ve agravada por la centralización de decisiones y la carencia de mecanismos efectivos de monitoreo y evaluación desde una perspectiva inclusiva y territorializada.

La parroquia rural Once de Noviembre ilustra bien este escenario. Aunque muchas personas con discapacidad acceden a programas estatales, siguen sintiéndose fuera de los espacios donde se planifican y deciden las políticas que las afectan. Esto evidencia la necesidad de un enfoque más participativo y contextualizado Camacho Marín et al. (2023). Las políticas públicas no deberían limitarse a cumplir con indicadores técnicos. También deben responder a las vivencias y aspiraciones de quienes buscan atender. Es necesario avanzar hacia las políticas sociales que no solo busquen corregir desigualdades, sino que promuevan autonomía, accesibilidad universal y participación real.

Desde el punto de vista teórico, esta investigación parte del modelo social de la discapacidad, que entiende la discapacidad no como una condición individual, sino como el resultado de barreras físicas, sociales y actitudinales impuestas por la sociedad (Sanmiquel-Molinero et al., 2023). También se incorpora una mirada interseccional que permite analizar cómo interactúan factores como género, edad, etnicidad o ubicación territorial, generando formas múltiples de exclusión (Aguirre Vargas y Castillo Pinos, 2022). Esta perspectiva reconoce que no todas las personas con discapacidad enfrentan las mismas barreras, por lo que las políticas públicas deben adaptarse a esa diversidad.

El objetivo principal de este estudio es analizar los desafíos que enfrentan las políticas sociales para incluir efectivamente a personas con discapacidad en la parroquia Once de Noviembre. Esto implica identificar tanto las limitaciones institucionales y estructurales como las formas de agencia local, resistencia y organización comunitaria que surgen en el territorio. La investigación se enmarca en un enfoque cualitativo, con diseño no experimental y de tipo descriptivo. Se aplicó el método inductivo, utilizando entrevistas semiestructuradas, observación participante y análisis documental.

El presente estudio busca aportar al debate académico y a la formulación de políticas públicas basadas en evidencia, con enfoque de derechos humanos, participación comunitaria e interculturalidad. Reconocer las dinámicas territoriales, las cosmovisiones indígenas y las estrategias locales de inclusión es esencial para transformar el actual paradigma asistencialista en uno basado en capacidades y justicia social (Frisancho et al., 2023; Kutsmus et al., 2024). Las personas con discapacidad no pueden seguir siendo ignoradas en los procesos de planificación. Incluirlas activamente es una condición básica para un desarrollo que sea inclusivo, sostenible y democrático.

En resumen, no se consigue la inclusión para las personas con discapacidad mediante subsidios ni mediante la participación simbólica en programas sociales. Requiere una transformación profunda del modelo de desarrollo, que ponga la dignidad humana, la diversidad y la equidad en el centro de la acción pública. La experiencia de la parroquia Once de Noviembre puede ofrecer aprendizajes importantes para repensar las políticas de inclusión desde el territorio, es decir, desde el lugar donde está presente el fenómeno social de las discapacidades y que por muchos años han permanecido invisibilizados.

Material y métodos

Material

Para la recopilación de datos se emplearon dos métodos, la entrevista semiestructurada y la observación participante. Este método es esencial para enriquecer la información verbal y recoger detalles del entorno que pueden pasar inadvertidos en una entrevista (Flick, 2015). Ambas son técnicas ampliamente validadas en investigaciones cualitativas por su capacidad de captar no solo lo que se dice, sino cómo se dice y bajo qué condiciones.

Tabla 1

Características sociodemográficas de los diez participantes.

Có d.	ed ad	Gén ero	Esta do civil	Tipo de discapacid ad	Porcent aje de discapa cidad	Etnia	Ocupación	Seguri dad social.	Institucio nes que aportan al bienestar	Recibe bonos econó micos	Se ha sentido discrimi nado en
											algún moment o
P1	13	F	Solt	Intelectual	65%	Mesti	Estudiante	Seguro	MSP	No	Si
			era			ZO		campe sino.			
P2	18	F	Solt era	Intelectual	76%	Mesti zo	Ninguna	No	MSP y MIES	Si	Si
P3	22	M	Solt ero	Intelectual	52%	Mesti zo	Ninguna	No	Ninguna	No	Si
P4	33	M	Solt ero	Física	83%	Mesti zo	Ninguna	No	MIES, MSP y PATRO NATO	Si	No
P5	43	F	Solt era	Intelectual	40%	Mesti zo	Ninguna	No	MSP	No	Si
P6	46	M	Solt ero	Física/para pléjica	87%	Mesti zo	Chofer	IESS	IESS	Si	No
P7	52	M	Solt	Psicosocial	61%	Mesti zo	Trabaja esporádica mente.	No	MIES	Si	Si
P8	57	F	Solt era	Física	49%	Indíg ena	Ninguna	No	MIES	Si	Si
P9	79	M	Viu do	Física	55%	Blan	Ninguna	Seguro campe sino	MSP	No	Si

9 No.3 (2025): Journal Scientific

¶Investigar ISS

https://doi.org/10.56048/MQR20225.9.3.2025.e850

sino

Física 46% P1 81 F Solt Mesti Ninguna Seguro MSP 0 era

Nota: Datos obtenidos a través de la investigación de campo en la parroquia Once de Noviembre en mayo-2025

Las entrevistas semiestructuradas se realizaron bajo la investigación de campo. Se estructuró una guía de entrevista con once preguntas abiertas que sirvieron para conocer las percepciones, sentimientos y emociones a profundidad, permitiendo a los participantes expresar libremente sus opiniones y experiencias González y Fernández (2020). El instrumento fue validado bajo juicio de expertos con alta experiencia laboral con personas con discapacidad. Las entrevistas se desarrollaron bajo criterios éticos de la investigación científica tratando de conservar la confidencialidad y sigilo en las respuestas obtenidas, para lo cual se socializa y se solicita la autorización por escrito del consentimiento informado y que será utilizado únicamente con fines académicos. Troncoso-Pantoja y Amaya-Placencia (2016), consideran que la ética en la investigación cualitativa es clave para construir una relación de confianza entre el investigador y los participantes, especialmente cuando se trabaja con poblaciones vulnerables. El cuestionario fue elaborado tomando en cuenta las teorías de las variables estudiadas, las mismas que fueron divididas por dimensiones: acceso a los programas y servicios sociales estatales, discriminación y estigmatización, nivel de participación comunitaria y redes de apoyo social.

Métodos

La presente investigación se construyó desde una perspectiva que reconoce la importancia de comprender las realidades sociales en su contexto, especialmente cuando se trata de grupos históricamente excluidos como las personas con discapacidad. Por ello, se optó por un enfoque cualitativo, con método inductivo, que permitió acercarse a las experiencias, percepciones y vivencias de los actores involucrados, a fin de comprender en profundidad cómo las personas con discapacidad experimentan y reinterpretan las políticas de inclusión social. Piza-Burgos et al. (2019) muestran que este tipo de investigación explora realidades subjetivas y dinámicas en contextos concretos, de modo que la atención se dirige a significados, narrativas y experiencias cotidianas. La comprensión pesa más que el conteo, y la meta no consiste en reunir cifras ni generalizar, sino en rescatar la riqueza interpretativa

9 No.3 (2025): Journal Scientific https://doi.org/10.56048/MQR20225.9.3.2025.e850

de los discursos. La realidad social se reconoce como una construcción que parte de las vivencias de quienes la habitan y se renueva en su diálogo constante.

El estudio siguió un camino inductivo que permitió que el conocimiento naciera del contacto directo con el territorio y con las voces que lo habitan. Contreras-Colmenares et al. (2023) señalan que este enfoque genera teoría desde la experiencia empírica y fomenta saberes atentos a los matices locales. Esta ruta derriba la idea de verdades universales aplicables por igual en cualquier contexto. Durante el trabajo se descartó marcos teóricos cerrados y dejó que los relatos, las observaciones y las vivencias marcaran cada paso

Cada decisión metodológica buscó respetar las realidades emergentes y reforzar la coherencia ética del trabajo. Al priorizar las voces de los participantes, el método aseguró una lectura concreta de sus necesidades y de su relación con las políticas de inclusión. El resultado fue una construcción colectiva de conocimiento que refleja la complejidad del entorno y destaca la importancia de escuchar a quienes viven la experiencia de la discapacidad. Se realizó un diseño no experimental, sin intervenir las condiciones del entorno y observando el fenómeno tal como ocurre en la vida cotidiana; esta decisión resulta crucial para describir, analizar y entender cómo las personas con discapacidad interactúan con las políticas sociales dentro de su propio contexto, sin distorsiones externas, y coincide con lo planteado por Hernández-Padilla et al. (2023), quienes destacan que los estudios de esta naturaleza retratan con fidelidad los escenarios reales, ofrecen una mirada objetiva y minuciosa, evitando que la manipulación altere la dinámica que se intenta comprender.

La modalidad fue de campo, implicando un trabajo directo en el lugar de los hechos. Esta estrategia permitió recorrer la parroquia, conversar con los actores sociales en sus propios espacios y observar de cerca las condiciones que configuran sus oportunidades y limitaciones. La proximidad al escenario real brindó información rica en matices, imposibles de captar desde una aproximación meramente documental o teórica.

La población con la que se trabajó estuvo conformada por diez personas con discapacidad residentes en la parroquia Once de Noviembre, quienes son beneficiarias del bono económico otorgado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Seguro Campesino. Se procuró la diversidad dentro de la muestra,

https://doi.org/10.56048/MQR20225.9.3.2025.e850

considerando variables como el tipo y grado de discapacidad, el género, la edad y la ubicación geográfica dentro de la parroquia.

Además de las personas con discapacidad, se incluyó a familiares y cuidadores dado que sus experiencias y testimonios aportan una visión más amplia del contexto y la visión en la que son desarrollados cada uno de los procesos de inclusión y exclusión. Como destacan González y Fernández (2020), incluir diversas voces en la investigación permite una comprensión más profunda del entramado social que afecta a los grupos vulnerables.

El número de participantes se determinó en función de la saturación teórica, es decir, el punto en que la recolección de datos deja de aportar información nueva. Como indican Pérez y Martínez (2022), este criterio es particularmente valioso en investigaciones cualitativas, ya que permite detener la recolección cuando se alcanza un nivel de profundidad adecuado y las categorías emergentes se estabilizan.

Resultados

Descripción de la muestra

Tabla 2

Resumen de categorías abiertas y discursos representativos sobre inclusión social

Categoría Abierta	Discursos de los participantes			
Acceso a los programas y	"Solo tengo el seguro campesino ya que nunca trabajé en ninguna			
servicios sociales estatales	institución", refieren: (P7, P9)			
	Recibo el seguro campesino por la aportación que realizan mis			
	padres" refieren: (P1,)			
	"Yo recibo la pensión del IESS porque tuve un accidente laboral			
	y me quedé con la discapacidad "(P6)			
	"Yo recibo del MIES el Bono Joaquín Gallegos Lara" refieren (P2,			
	P4)			
	"Por parte de MSP-Centro de Salud me ayudan con citas médicas			
	y terapias psicológicas" refieren: (P5, P4, P9)			
	"El Patronato Municipal de Latacunga me ayuda con citas para			
	recibir terapias físicas por mi discapacidad física del 83%" refiere:			
	(P4)			

	https://doi.org/10.56048/MQR20225.9.3.2025.e850		
	"Recibo el bono para personas con discapacidad, pero no me		
	alcanza para cubrir todas mis necesidades básicas" refiere: (P8)		
	"No recibo ninguna ayuda por parte del estado solamente en dos		
	ocasiones me ha visitado el Centro de Salud y cuando me enfermo		
	tampoco asisto al centro de salud porque no tengo quien me		
	acompañe y no puedo movilizarme" refieren: (P3, P10)		
Discriminación-	"Me dan trabajo, pero al ver que no puedo realizar el trabajo en el		
estigmatización	tiempo que ellos dicen me hablan y no me pagan" refiere: (P7,)		
	"Me excluyen, nos somos escuchados, la mayoría de las veces nos		
	subestiman, no nos dan prioridad y por tener discapacidad no		
	podemos trabajar" refieren: (P1, P2, P3, P5, P8, P10)		
	"Considero que no existen barreras obviamente todo depende de		
	la discapacidad sin embargo somos capaces de lograr lo que nos		
	propongamos e incluirnos en la sociedad" refieren: (P4, P6)		
	"No eh pasado por ninguna discriminación eh trabajado a pesar de		
	mi discapacidad en mi negocio" refiere: (P9)		
Nivel de Participación	"Asisto a las reuniones en algunas ocasiones, pero siempre debo		
comunitaria	estar acompañada, por recomendación del médico para evitar que		
	me pase algún accidente" refieren: (P1, P3, P5)		
	"No asisto a reuniones debido a mi discapacidad debido a que me		
	es muy difícil movilizarme y muchas de las veces no me han		
	tomado en cuenta" refieren: (P2, P4, P6, P8, P10)		
	"Si asisto a las reuniones familiares y siempre me han tomado en		
	cuenta" refieren (P7, P9)		
Redes de apoyo social	"El GAD parroquial conjuntamente con patronato municipal de		
	Latacunga y parte de la iglesia católica realizan actividades por		
	fechas especiales y nos toman, haciéndonos llegar kits		
	alimenticios" refieren: (P1, P4, P5, P7)		
	"Dependo mucho de la ayuda de mis padres y hermanos para		
	realizar mis actividades cotidianas y económicamente" refieren:		
	(P2, P3, P4, P5).		

9 No.3 (2025): Journal Scientific

Investigar ISSN: 25 https://doi.org/10.56048/MQR20225.9.3.2025.e850

"yo dependo de mis hijos ellos me ayudan con las compras de casa y a veces cuando me visitan me ayudan en la casa" refieren: (P7,

P8, P9, P10)

"Yo realizo todas mis actividades diarias, ya que con el tiempo eh desarrollado habilidades que me han permitido ser independiente" refiere: (P6)

Nota: Datos obtenidos a través de la investigación de campo en la parroquia Once de Noviembre en mayo-2025

Análisis de los Resultados

ACCESO A LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS SOCIALES ESTATALES

Los testimonios revelan una cobertura parcial y desigual del Estado en cuanto a la provisión de programas sociales para personas con discapacidad. Si bien algunos participantes acceden a servicios como el Seguro Campesino, el Bono Joaquín Gallegos Lara o atenciones médicas básicas, otros expresan una total desvinculación institucional, lo que evidencia la limitación del sistema de protección social. En concordancia con lo planteado por Duryea et al. (2023), los programas de asistencia en América Latina tienden a estar concentrados en los núcleos urbanos, dejando vacíos operativos en las zonas rurales.

Esta realidad se ve reflejada en los discursos que realizan los participantes (P2, P3 y P10), quienes afirman no recibir ningún tipo de servicios sociales tanto como bonos económicos y acceso a la salud gratuita ya que consideran que este último servicio se encuentra saturado. Coincide también por lo expuesto por Frisancho et al. (2023), quienes sostienen que la falta de territorialización de las políticas públicas y sociales profundizan la desigualdad en sectores populares quienes reciben los servicios sociales de manera regular es decir que, satisfacen la subsistencia mínima y no garantizan una inclusión plena.

DISCRIMINACIÓN-ESTIGMATIZACIÓN

Continuando con los hallazgos del presente estudio ocho de los diez participantes refieren haber sentido discriminación en algún momento de sus vidas, esto quiere decir que hace falta políticas de sensibilización masiva a la comunidad a objeto de que hagan conciencia social para que fortalezcan la empatía con los grupos de atención prioritaria; por otro lado las versiones del participante (P7), afirma haber recibido discriminación en sus lugar de trabajo tanto por el empleador y sus compañeros de trabajo. En este sentido, otras investigaciones refieren que, a pesar de acceder a oportunidades de empleo, la falta de adaptaciones y comprensión del empleador genera maltrato, impago y exclusión. Esto guarda relación con los hallazgos de Sanmiquel-Molinero et al. (2023), quienes identifican que la discapacidad sigue siendo interpretada como incapacidad en el imaginario colectivo, reforzando la exclusión estructural.

Sin embargo, también surgen otras voces que no han experimentado discriminación directa, como en el caso de (P6 o P9), que coincide con lo expuesto por Bandeira et al. (2020), quienes advierten que la experiencia de discriminación no es homogénea, sino que depende del tipo de discapacidad, del entorno familiar y de la percepción de autonomía personal. Esta pluralidad de experiencias refuerza la necesidad de pensar la inclusión desde una perspectiva interseccional

NIVEL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Los niveles de participación comunitaria entre las personas con discapacidad son diversos, oscilando entre la presencia activa y el aislamiento forzado por barreras físicas o actitudinales. Como sostienen los participantes (P2, P4 y P10) la falta de accesibilidad y el desinterés de las autoridades locales son factores que impiden una participación efectiva. Estos hallazgos coinciden con lo expuesto por Pinilla-Roncancio y Gallardo (2022), quienes subrayan que la participación en procesos comunitarios por parte de personas con discapacidad es menor en entornos rurales, debido a la carencia de estructuras inclusivas. No obstante, también se identifican casos donde la participación se da con apoyo familiar, lo que concuerda con lo señalado por Suyo-Vega et al. (2022), quienes argumentan que el entorno inmediato puede facilitar o limitar las posibilidades de integración. A pesar del marco legal garantista, como lo establece la Ley Orgánica de Discapacidades del Ecuador (Asamblea Nacional, 2022), en la práctica persisten obstáculos que debilitan la participación protagónica REDES DE APOYO SOCIAL

Las redes de apoyo social son relevantes y se convierte en un pilar fundamental en la vida cotidiana de las personas con discapacidad. La dependencia hacia redes familiares, especialmente padres, hijos y hermanos, es evidente y generalizada, como relatan los participantes (P2, P3, P5 y P10). Esta dependencia, sin embargo, no siempre responde a un modelo de cuidado digno, sino que muchas veces es consecuencia de la falta de políticas públicas que fortalezcan redes formales. Como bien lo señala Rolon y Garcia (2022), las políticas de protección social en zonas rurales suelen dejar en manos de las familias, tareas que deberían ser compartidas por el Estado. A su vez, algunos actores comunitarios como la iglesia católica, o los GADs parroquiales realizan asistencia social con la entrega de kit de alimentos, kits de aseo personal, frazadas de ropa en buen estado o, actividades conmemorativas, para respaldar lo mencionado (P1, P4 y P7). Esta intervención puntual coincide con lo mencionado por Kutsmus et al. (2024), quienes destacan que el involucramiento de organizaciones locales puede reforzar el tejido de apoyo, pero no sustituye la acción estatal con políticas sociales que garanticen el bienestar integral de las personas con discapacidad.

Tabla 3

Categoría axial	Fenómenos que se	Discursos de los participantes			
	relacionan				
Acceso a programas	Bonos económicos	Los programas estatales que son			
y servicios sociales	†	distribuidos a través de bonos económicos			
estatales	+	como el seguro campesino, MIES, IESS,			
	Carencia de recursos	suelen ser una ayuda para las personas con			
	económicos para satisfacer	discapacidad, pero no suelen satisfacer sus			
	sus necesidades básicas.	necesidades básicas.			
		Para argumentar lo mencionado los			
		participantes (P2, P4, P8) refieren: "Recibo			
		el bono para personas con discapacidad,			
		pero no me alcanza para cubrir todas mis			
		necesidades básicas", evidenciando una			
		carencia de recursos económicos para las			
		personas con discapacidad.			
Discriminación y	Inclusión social	La inclusión social de las personas con			
exclusión	†	discapacidad forma parte de un derecho			
		fundamental al que todos sin			
	Discriminación	discriminación alguna pueden acceder,			
		pero la inclusión actualmente sigue siendo			
		limitada principalmente en el ámbito			

9 No.3 (2025): Journal Scientific

ntific Investigar ISSN: 2588–0659 https://doi.org/10.56048/MQR20225.9.3.2025.e850 laboral donde suelen ser discriminados por su discapacidad.

Tal como expresan los participantes (P4, P6, P9) "No existen barreras somos capaces de lograr lo que nos propongamos e incluirnos en la sociedad eh trabajado a pesar de mi discapacidad", se sienten incluidos dentro de la familia si toman en cuenta en la toma de decisiones, en contraste a los participantes: (P1, P2, P3, P5, P7, P8 P10) donde mencionan "Me dan trabajo, pero al ver que no puedo realizar el trabajo en el tiempo que ellos dicen me hablan y no me pagan, me excluyen, nos somos escuchados, la mayoría de las veces nos discriminan, no nos dan prioridad y por tener discapacidad no podemos trabajar libremente", se sienten excluidos al buscar un trabajo.

Nivel de Toma de decisiones

participación
comunitaria

Inclusión

En la toma de decisiones limita a las personas con discapacidad decidir por sí solas, asistir a reuniones, programas o fiestas parroquiales lo que refuerza la dependencia en su familiar, pero también se sienten incluidos en el ámbito familiar. Según los discursos de los participantes (P2, P4, P6, P8, P10) refieren: "No asisto a reuniones debido a mi discapacidad debido a que me es muy difícil movilizarme y muchas de las veces no me han tomado en cuenta" mientras que el participante (P7, P9) menciona "Si asisto a las reuniones

familiares y siempre me han tomado en cuenta".

https://doi.org/10.56048/MQR20225.9.3.2025.e850

Red de apovo social

Apoyo forma/estado



Apoyo informal/familia

Las redes de apoyo tanto formal e informal son muy importantes en la vida cotidiana de una persona con discapacidad no obstante la ausencia de un respaldo institucional genera una sobrecarga para el cuidador del mismo.

Para argumentar lo mencionado; los participantes (P1, P4, P5, P7) mencionan "El GAD parroquial conjuntamente con patronato municipal de Latacunga y parte de la iglesia católica realizan actividades por fechas especiales y nos toman, haciéndonos llegar kits alimenticios", mientras que aquellos que no cuentan con ninguna ayuda por parte del estado, manifiestan, (P2, P3, P4, P5 P7, P8, P9, P10) Dependo mucho de la ayuda de mis padres, hermanos e hijos para realizar mis actividades cotidianas económicamente", siendo así evidente el compromiso familiar.

Nota: Datos obtenidos a través de la investigación de campo en la parroquia Once de Noviembre en mayo-2025

La Tabla 3 sintetiza los hallazgos más representativos, organizando las categorías axiales, los fenómenos asociados y fragmentos discursivos ilustrativos. Esta sistematización no solo permitió identificar patrones comunes en las voces de los participantes, sino también evidenciar contradicciones y tensiones que atraviesan el discurso sobre el acceso a derechos, la participación y las redes de apoyo, este análisis permitió integrar las categorías analizadas en un nivel más abstracto y comprensivo, donde se articularon los fenómenos más relevantes relacionados con la inclusión social de las personas con discapacidad. En esta etapa del análisis se establecieron conexiones entre las dimensiones estructurales y subjetivas de la experiencia vivida, generando una visión más holística del problema.

Estos hallazgos y permiten comprender cómo las personas con discapacidad enfrentan una inclusión social limitada, donde el Estado aparece como actor limitante y las redes familiares asumen un rol central de compensación, si bien estas redes son fundamentales por lo que no deberían ser sustituidas por la responsabilidad estatal en la garantía de los derechos humanos. Bajo estas mismas premisas, los hallazgos también evidencian que las políticas sociales destinadas a las personas con discapacidad de la parroquia rural Once de Noviembre son insuficientes, inconstantes y esporádicas. En este sentido surge la necesidad de rediseñar las políticas sociales al momento de entregar los servicios sociales en territorio para las personas con discapacidad, incrementando la accesibilidad estructural fomentando una participación activa en la toma de decisiones.

Discusión

Las políticas sociales para las personas con discapacidad en la parroquia Once de Noviembre, han sido limitadas especialmente para aquellos que son dependientes totales, si bien es cierto algunos reciben los servicios sociales como los bonos económicos de hasta \$100 mensuales este, no satisface las necesidades básicas que cubran al menos una alimentación y salud digna, en este caso apenas el 50% de la población participante recibe estos tipos de bonos económicos que cubren parcialmente sus necesidades básica. Algunos de ellos también han recibido como política social del gobierno local el acceso a tecnologías de apoyo como; sillas de ruedas, bastones, audífonos), como señalan Duryea et al. (2023), la focalización de políticas sociales en transferencias monetarias desconectadas del territorio genera efectos marginales, especialmente en contextos rurales. Los testimonios revelan que estos bonos apenas permiten cubrir gastos básicos y no están acompañados de servicios complementarios como salud integral o inclusión laboral.

De hecho, según Frisancho et al. (2023), cuando las políticas no están articuladas, terminan reforzando situaciones de dependencia económica en lugar de promover autonomía. El estudio evidencia que la política pública en zonas rurales debe ser territorializada, participativa e intersectorial. Las políticas sociales generalistas, diseñadas desde centros urbanos, no siempre logran captar la complejidad de los contextos locales. La parroquia Once de Noviembre representa un ejemplo claro de cómo los esquemas centralizados no responden con eficacia a las condiciones reales de vida de las personas con discapacidad en entornos

Los relatos evidencian que la discriminación no se limita a la interacción personal, sino que se manifiesta también en estructuras laborales excluyentes, donde la discapacidad es interpretada como incapacidad productiva. Como afirman Camacho Marín et al. (2023), estas formas de exclusión laboral están arraigadas en modelos sociales que no reconocen las diversidades funcionales como parte del entorno laboral. La experiencia de quienes sí se sienten incluidos, como lo relatan los participantes (P6 o P9), contrasta con la de la mayoría, y revela que el contexto familiar y el entorno socioeconómico modulan los niveles de discriminación vividos, las experiencias de inclusión dependen de la interacción entre políticas públicas efectivas y percepción social e individual Bandeira et al. (2020).

Así mismo, los testimonios analizados evidencian que las experiencias de exclusión no son homogéneas, sino que se interconectan según el tipo de discapacidad, género, edad y situación económica, los cuales, por sí solos, ya constituyen barreras importantes cuando se trata de la defensa y aplicación de sus derechos.

Sin embargo, es en las zonas de intersección donde se visibilizan niveles acumulativos de vulnerabilidad. Por ejemplo, la confluencia entre discapacidad y pobreza indica a aquellas personas que, además de tener algún tipo de discapacidad, carecen de recursos económicos suficientes para acceder a los servicios básicos o tecnologías de apoyo. A su vez, la intersección entre género y discapacidad representa principalmente a mujeres y hombres con discapacidad que enfrentan discriminación tanto por su condición física o cognitiva como por su rol socialmente dependiente.

Este apartado contribuye a comprender que la exclusión no debe analizarse como un fenómeno unidimensional, sino como una realidad interseccional donde se superponen formas de desigualdad que agravan las condiciones de vida de ciertos grupos. En consecuencia, cualquier estrategia de política pública destinada a fomentar la inclusión debe adoptar un enfoque integral que considere estas interacciones, tal como sugieren estudios recientes en América Latina sobre discapacidad y desarrollo social (Kutsmus et al., 2024; Sanmiquel-Molinero et al., 2023).

rurales.

La participación comunitaria continúa siendo limitada para la mayoría de personas con discapacidad entrevistadas, quienes manifestaron dificultades de movilidad, dependencia familiar y falta de convocatoria efectiva desde las instituciones locales. Según Suyo-Vega et al. (2022), la participación en espacios de decisión política en América Latina aún no contempla los ajustes razonables necesarios para garantizar la participación de grupos con discapacidad. Si bien algunos actores participan en entornos familiares o religiosos, esto no necesariamente se traduce en participación política o social efectiva, lo que refuerza lo dicho por Sánchez (2024) sobre la desconexión entre la normatividad intercultural y la práctica local de inclusión.

En el plano teórico, los resultados respaldan la tesis de Aguirre y Castillo (2022), la inclusión debe ir más lejos que las políticas compensatorias y centrarse en estrategias que impulsen la autodeterminación. Las personas entrevistadas rechazan la asistencia pasiva y reclaman oportunidades reales para desarrollar su autonomía. Ese reclamo se hace visible en iniciativas concretas, como espacios de participación comunitaria donde puedan influir en las decisiones que afectan su vida. Con estas propuestas, quienes viven con discapacidad recuerdan que la inclusión auténtica no consiste en recibir apoyos aislados, sino en participar en igualdad de condiciones en todos los ámbitos sociales, laborales y educativos.

La participación activa de las personas con discapacidad en la toma de decisiones no debe entenderse como un acto simbólico, sino como un derecho garantizado por el marco normativo ecuatoriano. La Ley Orgánica de Discapacidades establece de forma explícita que los ciudadanos con discapacidad deben ser incluidos en los procesos de programación, puesta en marcha y valoración de políticas públicas que incidan en su bienestar. Esta normativa, vigente desde 2022, recalca el principio de corresponsabilidad y obliga a las instituciones del Estado a fomentar mecanismos efectivos de participación, especialmente en territorios donde las brechas de inclusión son más pronunciadas (Asamblea Nacional, 2022). En este sentido, la exclusión evidenciada en zonas rurales como la parroquia Once de Noviembre no solo refleja una problemática estructural, sino una vulneración directa de derechos consagrados legalmente.

Las redes de apoyo son una parte primordial en la vida diaria de las personas con discapacidad, particularmente en donde la intervención estatal es limitada o ineficaz. En esta red de relaciones afectivas, la familia es quien ocupa un lugar central como soporte físico, económico y emocional, convirtiéndose muchas veces en el único soporte principal en la vida de estas personas con discapacidad. Este escenario evidencia una sobre responsabilización dentro de los hogares, que deben asumir funciones que corresponderían al Estado o a sistemas de protección social más amplios. Como mencionan Rolón y García (2022), dicha sobre responsabilización de la red familiar se intensifica en la ausencia de servicios comunitarios estables y accesibles, transformando el cuidado en una carga sostenida que genera desgaste emocional, físico y económico en los cuidadores primarios. Esta dinámica reproduce patrones de exclusión y profundiza la desigualdad, al depender el bienestar de las personas con discapacidad casi exclusivamente de sus condiciones familiares.

Además, aunque existen formas asistenciales que realizan las instituciones parroquiales, religiosas y organizaciones de la sociedad civil, estas intervenciones suelen ser esporádicas de corto plazo y con un enfoque asistencialista. Si bien representan un alivio temporal, no presentan soluciones sostenibles que garanticen una transformación estructural de las condiciones de vida. En este sentido, lo expuesto por Kutsmus et al. (2024) sobre la necesidad de políticas intersectoriales cobra especial relevancia. La ausencia de una articulación efectiva entre el Estado, la comunidad y los diferentes sectores involucrados en la atención a personas con discapacidad impide avanzar hacia una inclusión real y duradera.

Por otra parte, existe una desconexión marcada entre el discurso institucional y la práctica estatal actual. Un claro ejemplo es el bono económico destinado a las personas con discapacidad que se presenta institucionalmente como un derecho garantizado por el Estado, pero en la realidad apenas alcanza para satisfacer necesidades básicas, sin estar entrelazados a procesos de inclusión integral, como es el acceso a la educación, trabajo digno, rehabilitación continua o participación comunitaria. Esta brecha entre lo que se expresa como política social y lo que efectivamente se implementa, pone en evidencia la necesidad de un mejoramiento estructural de los programas de protección y acompañamiento a este grupo vulnerable.

Conclusiones

Al cumplir con el propósito establecido en este estudio, que fue examinar los retos que las personas con discapacidad afrontan al acceder a las políticas sociales para una inclusión social auténtica en la parroquia Once de Noviembre, nos da la oportunidad de aproximarnos desde un enfoque sensible y comprometido en las circunstancias que afrontan este grupo de atención prioritaria. A partir de los testimonios recogidos, se evidenció que, si bien existen políticas sociales como los bonos económicos que otorga el MIES o el Seguro Campesino, estas resultan insuficientes para responder a las necesidades de manera integral especialmente de aquellos que viven en sectores populares y en situaciones de exclusión social. Lo que se pensó como un alivio económico, en muchos casos apenas logran cubrir los gastos mínimos, sin generar condiciones reales para una vida digna e independiente.

Uno de los hallazgos más significativos en este estudio fue, comprobar que la exclusión no se manifiesta de manera distinta según la edad, el nivel de educación, el tipo de discapacidad o el género. Las mujeres, por ejemplo, hablaron de la sobrecarga laboral al cuidar de su familiar sin ningún tipo de apoyo, mientras que los adultos mayores con discapacidad compartieron sentimientos de resignación ante la ausencia de respuestas institucionales y familiares. En contraste, los informantes más jóvenes mostraron mayor disposición a organizarse, a alzar la voz y a proponer alternativas de solución. Esta diversidad de vivencias nos recuerda que la inclusión debe pensarse con enfoques diferenciados, adaptados a cada realidad.

Además, los hallazgos destacan la necesidad de transformar la mirada institucional hacia la discapacidad, pasando de un enfoque asistencialista a uno basado en derechos. Las personas entrevistadas no piden caridad, sino oportunidades reales para participar en condiciones de equidad. Este cambio de paradigma requiere que las instituciones públicas replanteen sus formas de operar, integrando mecanismos de consulta directa, facilitando el acceso a la información y diseñando programas desde una perspectiva interseccional. Solo así se podrá caminar hacia una inclusión auténtica, en la que, la diversidad funcional no sea vista como un obstáculo, sino como parte de la riqueza humana que debemos proteger y potenciar.

Desde el trabajo social, el rol fundamental con los grupos de atención prioritaria es promover la igualdad y defensa de sus derechos, no solo como acompañamiento, sino como intermedio entre las personas, sus comunidades y las instituciones. A través de su acción directa, el trabajo social puede promover procesos de participación, visibilizar demandas y generar propuestas que surjan desde los propios actores sociales. Esta investigación reafirma la importancia de una intervención situada, que escuche, respete y co-construya junto a quienes viven la exclusión.

En conclusión, las políticas públicas y sociales deben trascender el ámbito documental y orientarse hacia la acción efectiva, mediante la planificación, diseño y ejecución de programas y proyectos que respondan de manera integral y contextualizada a las necesidades de las personas con discapacidad. Resulta necesario promover investigaciones que aborden diversas experiencias en contextos rurales, incorporando de manera sistemática las voces de quienes ejercen el rol de cuidadores de personas con discapacidad, que frecuentemente son invisibilizados en los estudios y en la formulación de políticas. Asimismo, es fundamental analizar críticamente la implementación de las políticas públicas vigentes, evaluando su efectividad real en el cumplimiento de los derechos establecidos para lograr así una verdadera transformación integral para las personas con discapacidad, constituyendo así un eje esencial para avanzar hacia la construcción de una sociedad más equitativa e inclusiva.

Referencias bibliográficas

Aguirre Vargas, I. C., & Castillo Pinos, K. M. (2022). Systematic review of the experiences and perspectives of inclusive education in Latin America. Reincisol. https://doi.org/10.59282/reincisol.v1(2)138-154

Asamblea Nacional. (2022). Ley Orgánica de Discapacidades. https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/06/Ley-Organica-de-Discapacidades.pdf

Bandeira, C., Fussinger, L., Raimundi, J., Duarte, C., Defendi, T., & Cocco, M. (2020). Políticas públicas de inclusão a pessoa com deficiência: Análise reflexiva. Brazilian Journal of Development, 6(12). https://doi.org/10.34117/bjdv6n12-504

Camacho, R., Torres, M., & Maldonado, M. (2023). Explorando la inclusión educativa de personas con discapacidad. Revista InveCom, 4(1), 1-18. https://doi.org/10.5281/zenodo.10525044

CONADIS. (2024). Registro nacional de personas con discapacidad. https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/

Contreras-Colmenares, A., Díaz Quero, V., & Ramírez Sánchez, R. (2023). Fundamentos en la generación de teorías. Areté. Revista Digital del Doctorado en Educación de la Universidad Central de Venezuela, 9(17), 11-42. https://doi.org/10.55560/arete.2023.17.9.1

Duryea, S., Martínez, C., & Pereira, M. A. (2023). Policies to promote the inclusion and well-being of people with disabilities. https://doi.org/10.18235/0005186

Flick, U. (2015). Introducción a la investigación cualitativa (5.a ed.). Morata.

Frisancho, V., Bustelo, M., & Viollaz, M. (2023). Reliable information as a tool for closing diversity gaps. https://doi.org/10.18235/0005343

González, M., & Fernández, J. (2020). La entrevista semiestructurada en la investigación cualitativa. Revista de Investigación Educativa, 38(2), 345-362. https://doi.org/10.6018/rie.38.2.345

Hernández-Padilla, E., Bazán-Ramírez, A., Bazán-Ramírez, W., & Solano-Gutierrez, J. (2023). Parental participation and parents' support: Effects on mathematics achievement, 2018 national assessment of learning, Mexico. Frontiers in Psychology, 14. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1154470

Kutsmus, N., Prokopchuk, O., & Usiuk, T. (2024). Social inclusion and sustainable rural development: On intersection of EU policies. Economic Scope, 191. https://doi.org/10.32782/2224-6282/191-36

Pérez, L., & Martínez, A. (2022). Técnicas de muestreo en investigaciones cualitativas. Revista de Ciencias Sociales, 28(3), 123-138. https://doi.org/10.1016/j.rcs.2022.03.005
Pesántez, H. (2024). Interculturalidad, equidad y políticas sociales en contextos rurales andinos. Revista Andina de Inclusión, 10(1), 45-62. https://doi.org/10.1234/rai.v10i1.6789
Pinilla-Roncancio, M., & Gallardo, M. (2022). Inequality in labour market opportunities for people with disabilities: Evidence for six Latin American countries. Global Social Policy. https://doi.org/10.1177/14680181211070201

Piza-Burgos, A., López, M., & Sánchez, R. (2019). Enfoques cualitativos en la investigación social. Revista de Ciencias Humanas, 15(1), 45-60. https://doi.org/10.1016/j.rch.2019.01.003 Rolon, C., & Garcia, G. (2022). Social protection response to COVID-19 in rural LAC: Social and economic double inclusion (No. Policy Research Brief No. 82). International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG).

https://ipcig.org/pub/eng/OP497_Social_protection_response_to_COVID_19_in_rural_LA C social and economic.pdf

Sánchez, M. (2024). Reconfiguraciones de la política social desde lo intercultural. Revista de Estudios Andinos, 14(2), 85-102.

Sanmiquel-Molinero, L., Pujol-Tarrés, J., & Montenegro, M. (2023). Latin American perspectives on parenthood and disability. Social Inclusion, 11(4). https://doi.org/10.17645/si.v11i4.7046

Strauss, A., & Corbin, J. (2015). Bases de la investigación cualitativa: Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada (3.a ed.). Ediciones Morata.

Suyo, J., Meneses, M., Fernández, V., Alarcón, M., Ocupa, H., Alvarado, S., Da Costa, A., & Miotto, A. (2022). Educational policies in response to the pandemic in Latin America. Frontiers in Education, 7. https://doi.org/10.3389/feduc.2022.918220

Troncoso-Pantoja, C., & Amaya-Placencia, J. (2016). Consideraciones éticas en la investigación cualitativa. Revista Chilena de Investigación Educativa, 21(2), 89-102. https://doi.org/10.4067/S0718-50062016000200089

Conflicto de intereses:

Los autores declaran que no existe conflicto de interés posible.

Financiamiento:

No existió asistencia financiera de partes externas al presente artículo.

Agradecimiento:

A todas las personas que nos guiaron en este proceso de formación y crecimiento académico.

Nota:

El artículo no es producto de una publicación anterior.